

Francisco A. Madero
El reformismo en
El salvador

Desde el punto de vista político,¹ la historia reciente de El Salvador puede dividirse en tres periodos: el periodo de las juntas de gobierno que va de octubre de 1979 a marzo de 1982, el periodo de la Asamblea Constituyente que va de abril de 1982 a mayo de 1984, y el periodo del presidente de la república que se inició en junio de 1984.

El primer periodo, desde el 15 de octubre de 1979, o desde la caída del general Romero, hasta el 28 de marzo de 1982, o elección de la Asamblea Constituyente, puede calificarse como un periodo de movimientos de carácter estratégico. En él se definen los alineamientos políticos en torno a las diferentes visiones en disputa, toman forma las grandes fuerzas beligerantes, y se decretan las reformas económicas sobre las cuales se levantará un nuevo sistema político.²

Este primer periodo, a su vez, puede dividirse en tres subperiodos claramente diferenciados: el sub periodo de las ilusiones reformistas que va del 15 de octubre del 79 al 31 de diciembre del mismo año, en el que aún parece posible realizar reformas sociales de beneficio popular; el subperiodo que va de enero a marzo de 1980, en el que el reformismo cambia su tónica popular por una visión contrainsurgente; y el subperiodo de las reformas propiamente dichas que va de abril de 1980 a marzo de 1982.

El segundo periodo, de abril de 1982 a mayo de 1984, es decir, desde la instalación de la Constituyente hasta la elección del presidente de la república. Puede caracterizarse como un periodo de movimientos de índole táctica. En él se efectúan reajustes en la estructura de las fuerzas beligerantes pero que no llegan a modificarlas sustancialmente, y se completan las bases del nuevo sistema político.

El tercer periodo, desde junio de 1984, o desde que asume la presidencia Napoleón Duarte hasta la fecha, se presenta como un periodo de movimientos estratégicos, constituyendo la "prueba de fuego" del reformismo y del sistema político que se intenta levantar sobre su base.

EL PERIODO DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO

La historia de las juntas de gobierno que condujeron al país entre octubre de 1979 y marzo de 1982 es la historia de los intentos por implantar el reformismo en El Salvador y construir las bases para la estructuración de un nuevo sistema político acorde con las reformas económicas.

Durante este periodo se visualizaron dos planteamientos reformistas: el reformismo que

1 Es decir, de lo que se percibe como un proceso de reconstrucción de la sociedad política.

2 Sociedad política = sistema político + gobierno. Lo primero hace referencia a lo orgánico, lo estructural, lo segundo al uso de lo orgánico mediante cuadros.

buscaba el apoyo del movimiento popular, que creía posible hacer cambios estructurales por medios no violentos, preconizado por los principales miembros de la Primera Junta de Gobierno, y el reformismo que acompañaba cualquier cambio social con el propósito de liquidar al movimiento popular. La historia de las Juntas de Gobierno es la historia de la desilusión de los reformistas de izquierda y la consiguiente implantación del reformismo contrainsurgente.³

La primera Junta de Gobierno

El 16 de octubre de 1979, la pequeña burguesía y los sectores reformistas saludaron con beneplácito el golpe militar que un día antes había derrocado al general Carlos Humberto Romero. Les parecía que había llegado el momento de ajustar cuentas con la oligarquía y aplacar los ánimos de las masas populares; de matar dos pájaros de un tiro y superar la crisis política por la que atravesaba el país.

Y la crisis no era para menos. Durante los últimos seis meses las organizaciones populares habían mantenido una sostenida y creciente lucha social y reivindicativa que no podía ser ya controlada por los usuales métodos represivos.

En el mes de mayo de 1979, la captura de cuatro dirigentes populares provoca una movilización generalizada en la capital. Fueron ocupadas cuatro embajadas y tres iglesias, se realizaron siete movilizaciones populares e innumerables acciones de denuncia y propaganda, se levantaron barricadas en toda la ciudad, se quemaron autobuses, y por lo menos veinte sindicatos hicieron paros de apoyo. La respuesta del régimen fue violenta: unos cincuenta militantes cayeron abatidos a tiros durante esos días en los que la espiral de lucha parecía incontenible. Obreros, campesinos, jornaleros agrícolas, estudiantes, maestros y otras capas populares urbanas paralizaron completamente la capital y recuperaron a dos de los capturados.

A partir de junio, las huelgas obreras cobraron mayor vigor. Por lo menos diecinueve sindicatos iniciaron conflictos usando métodos violentos como la ocupación de la planta y la retención de rehenes, y un número no menor logró negociar sus condiciones de explotación sin llegar a las medidas de hecho. Por su parte, el régimen intentaba generalizar la represión sin obtener resultados satisfactorios; la Iglesia católica, los frentes de masas, las organizaciones gremiales de la ciudad y el campo, los sindicatos, todos sufrían amenazas, persecución, desaparecimientos, asesinatos, etcétera. Las acciones guerrilleras se sucedían con periodicidad, mientras la oligarquía acusaba al gobierno de vacilante e incapaz de establecer el orden e imponer la paz social.⁴

La lucha de clases agudizó los viejos problemas económicos y frenó la inversión de capitales; la producción total disminuyó en 1979 con relación a 1978, el capital financiero internacional dejó de fluir y muchas empresas cerraron sus plantas; la inversión en la agricultura se vio menguada y todo ello vino a agravar aún más la situación social.⁵

³ La noción es claramente redundante pues todo reformismo es contrainsurgente, pero en el contexto esta redundancia tiene una utilidad.

⁴ Cf. Francisco A. Moreno, "Estrategias de lucha de la izquierda salvadoreña", en *Cuadernos Políticos* n. 28, abril-junio de 1981, México, pp. 62-73.

⁵ El crecimiento de la economía entre 1976 y 1978 osciló entre el 4 y el 5%. El crecimiento industrial fue de 3% en 1978. Las exportaciones sufrieron una caída de 10.5% en relación a 1977 y la tasa de inflación alcanzó

La crisis tenía un claro matiz político. Las viejas fracciones estaban incapacitadas ya para dirigir la sociedad, era necesario revisar los términos de la dominación social y plantear nuevas estrategias que sirviesen para detener el avance de las masas y superar las dificultades económicas. Sin embargo, el deterioro económico del país no era sustancial en relación a otros momentos de decrecimiento. La crisis tenía que ser superada políticamente. El nivel de desarrollo alcanzado por el movimiento popular hizo evidente que no era posible postergar por más tiempo reformas socioeconómicas que se venían exigiendo desde dos décadas atrás. La cuestión consistía más bien en quién iba a realizar las reformas, con qué respaldo, con qué profundidad y hacia qué iban éstas a conducir.

El 15 de octubre de 1979 el capital entra en una fase de defensa estratégica de su dominación; se efectúa un enfoque político en el que la oposición reformista pasa al gobierno y el antiguo partido oficial a la oposición de derecha. La oligarquía esperaba que los reformistas pudieran controlar al movimiento popular, los reformistas creían poder realizar reformas antioligárquicas para ganarse a las masas, tanto unos como los otros creían necesario construir una distancia entre régimen y gobierno, los primeros para no verse comprometidos con supuestas reformas, los segundos para ser identificados como fuerza nueva.

Y ciertamente los principales rostros políticos fueron removidos. En vez de los conocidos personajes de Conciliación Nacional aparecieron nuevas caras, muchas de ellas jóvenes y de una trayectoria democrática intachable. También el lenguaje se hizo diferente, más populista, más comprensivo de las necesidades del pueblo, agresivo contra la oligarquía y con un tono internacional francamente “tercermundista”.

El gobierno de la primera Junta no era homogéneo. Junto a los políticos democráticos y reformistas que ocuparon casi la totalidad de los puestos civiles en un aparato de Estado, se encontraban en lugares claves militares aliados de la vieja clase dominante. Así, sucedió en la práctica que, mientras los elementos civiles vociferaban rabiosamente en contra de la oligarquía y anunciaban el pronto advenimiento de reformas de beneficio popular, los cuadros militares disparaban en contra del pueblo en defensa de las propiedades de la oligarquía.

El gobierno de la primera Junta no fue apoyado por los dominantes ni por los dominados. Aquéllos se sintieron atacados por las reformas con que se les amenazaba y frustrados por la incapacidad gubernamental de desarmar a las masas; éstas sintieron que les robaban demagógicamente sus banderas de lucha para engañarlas. La oligarquía se colocó rápidamente a la defensiva, asimilando al gobierno con las masas, mientras que el pueblo identificó al gobierno con la oligarquía.

La distancia entre régimen y gobierno no sirvió de nada, pues la Junta no pudo dictar una sola reforma estructural: no existía fuerza social dispuesta a apoyarla. El 31 de diciembre, ante la desconfianza del pueblo por un lado, y los ataques de la oligarquía por el otro, la mayoría de elementos reformistas abandonaron el gobierno. Sin embargo, en los últimos 75 días, la lucha de clases había crecido aceleradamente.

Entre octubre y diciembre de 1979, el movimiento popular acrecentó su combatividad en todos los ámbitos de la lucha social. Ocupaciones, movilizaciones, asaltos, huelgas, todos los métodos de lucha fueron puestos en acción y todas las banderas reivindicativas levantadas. Las diferentes corrientes ideológicas del movimiento propusieron su evaluación de la situación, actuaron con independencia y confluyeron en un conjunto de acciones que

no permitieron que el gobierno se estabilizara. Se promovieron paros laborales y éstos fueron apoyados por movilizaciones y ocupaciones; se levantó una plataforma reivindicativa que obligó al gobierno a definirse en la práctica frente al régimen y que agudizó conflictos con la clase dominante. La Junta no pudo asumir las reivindicaciones del movimiento popular pues éste había desarrollado un conjunto de demandas que, sin poner en peligro al régimen, eran imposibles de cumplir por un gobierno que no podía vencer a la oligarquía. Para diciembre, la alianza que habría de impulsar la defensa estratégica vía reformismo se había resquebrajado, los sectores democráticos comprendieron que las condiciones para realizar cambios sociales debían ser constituidos al lado del pueblo, los reformistas de derecha se percataron de que todo cambio debía ir acompañado de acciones militares contrainsurgentes y la oligarquía reafirmó su convicción de que la única salida era el aniquilamiento del movimiento popular y el obstaculizar cualquier intento de reformas.

La idea de reformas de beneficio y con apoyo popular había fracasado y sus impulsores se acercaban al movimiento de masas; tomaba forma el planteamiento reformista contrainsurgente, entre bastidores se percibía el planteamiento oligárquico.

La segunda Junta de Gobierno

La disolución de la primera Junta de Gobierno en diciembre de 1979 contribuyó a precisar los planteamientos en pugna. El subperiodo que va de enero a marzo de 1980, es decir, del gobierno de la segunda Junta, marcó el giro definitivo hacia la visión hasta hoy oficial: el reformismo contrainsurgente. Es el lapso en que se definen también las líneas generales de la visión del movimiento popular: el programa democrático-revolucionario.

El fracaso sufrido por el régimen en su intento por desarmar moral y materialmente al movimiento popular trajo consigo una nueva recomposición de las fuerzas; el campo dominante perdió dos partidos que salieron del gobierno y se trasladaron al campo popular y al mismo tiempo hizo su aparición una nueva organización política de derecha: el Frente Amplio Nacional.

Del lado de la vieja clase dominante, la lógica de los acontecimientos del último trimestre la había convencido de que la guerra constituía el punto central de cualquier intento de defensa del régimen de dominación. Se fueron definiendo así los objetivos de la futura acción política clasista:

- 1] la recuperación del gobierno para impedir cualquier reforma y dictar medidas económicas y políticas de apoyo sin restricciones al capital;
- 2] terminar con el movimiento popular en el menor tiempo posible; y
- 3] expulsar del ejército a los militares aparentemente reformistas.

Sin embargo, después de la ruptura de enero, la oligarquía no fue capaz de instalar a sus voceros en el gobierno. Ni encontró apoyo para ello, ni tenía el partido político capaz de asumir la gestión gubernamental. En el ejército mismo la situación era de división entre los militares que daban más importancia al reformismo y aquellos que ponderaban, ante todo, la aniquilación del movimiento popular. Los primeros habían ejecutado el golpe de Estado del 15 de octubre de 1979 y, aunque con tremendas presiones de parte de los segundos, permanecían a la cabeza del aparato de Estado.

De la ruptura de enero no surgió un gobierno oligárquico sino un gobierno despreciado por la oligarquía; tampoco surgió un gobierno popular, sino un gobierno repudiado por el

pueblo. Ni el uno ni la otra podían asumir el mando de manera inmediata, de forma que lo que nació de las cenizas de la primera Junta fue un gobierno de acuerdo entre el ejército y la democracia cristiana. Un gobierno reformista de derecha.

La segunda Junta de Gobierno tenía aún menos base social; que la Primera: ni la oligarquía ni el pueblo esperaban algo de ella. Sin embargo, pronto encontró este gobierno un apoyo muy poderoso. Dicho apoyo modificó las ideas originales de los demócrata-cristianos y modificó al mismo gobierno.

Dentro de esta Junta existía aún la voluntad de realizar reformas de beneficio popular. Con la salida de los reformistas de izquierda de la Primera Junta, tal vez los ataques de la oligarquía podían mermar, no se descartaba la posibilidad de convencer al pueblo de la viabilidad de las reformas, y r con el apoyo del ejército quizás se pudiese golpear la economía oligárquica.

Las reformas propuestas eran de tres tipos: agraria, bancaria y del comercio exterior. Sin embargo, ningún sector de la sociedad creía en ellas: para el movimiento popular se trataba de una nueva maniobra, la oligarquía las rechazaba de plano, y, sin embargo las reformas eran indetenibles. El gobierno de la segunda Junta encontró el apoyo para ellas en el gobierno de los Estados Unidos.

Los Estados Unidos se enfrentaron en El Salvador a la inevitabilidad de las reformas económicas; ante ello, lo que pudieron hacer fue imprimirles un carácter contrainsurgente y limitar su alcance relativo. Lo primero para liquidar al movimiento popular, la segunda para disminuir los embates de la oligarquía contra el gobierno. Durante los tres primeros meses de 1980 se planificaron las tres reformas anunciadas, pero ya no como cambios de beneficio y con apoyo popular sino con carácter contrainsurgente. Sus nombres no cambiaron pero su contenido varió sustancialmente, y aquellos políticos que se sentían comprometidos con un proyecto que esperaban tuviese contenido popular, tuvieron que abandonar el gobierno en el mes de marzo, justo al decretarse la Reforma Agraria. Quedaba claro que la conducción política del país había pasado a manos del gobierno norteamericano. Se había iniciado la era del reformismo en El Salvador de la única manera posible: ante la ausencia de una burguesía alternativa y capaz de asumir como propio el planteamiento reformista, éste se implantaba desde el exterior.

Tres reformas que habían sido pensadas para debilitar el poder de la oligarquía, abrir canales de participación democrática, redistribuir ingresos, resolver el problema de la distribución de la tierra y apoyar la industria se planificaron como reformas de apoyo al plan contrainsurgente. Si la oligarquía se veía afectada de alguna manera, esto constituía un mal necesario ante la urgencia por desarmar al pueblo y modernizar la economía. La Reforma Agraria generaría una clase media rural que contribuiría a la liquidación del movimiento de masas en el campo, la nacionalización de la banca y el comercio exterior aportarían el excedente económico que apoyaría los gastos militares y la reactivación industrial.

Los reformistas contaban con que iban a apoyarse en el ejército; éste debía ocupar el territorio nacional a fin de restablecer el monopolio del uso de la fuerza y destruir la vanguardia armada del pueblo. Pero en el seno del mismo se debatían los matices reformistas; era un ejército íntimamente ligado a la oligarquía. El plan necesitaba de un nuevo ejército para tener éxito, y ello sólo fue percibido por el régimen con un año de retraso.

Del lado del movimiento popular, los reformistas expelidos de la primera Junta, el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), la Unión Democrática Nacionalista (UDN) y

un poco más tarde lo que se denominó Movimiento Popular Social Cristiano (MPSC), se acercaron a las organizaciones de masas. Se generó en este campo una alianza, denominada Frente Democrático Revolucionario (FDR), que expresaba un primer acuerdo entre los intereses reformistas de unos y los intereses revolucionarios de otros. Este acuerdo se plasmó en la Plataforma Programática de un Gobierno Democrático. Revolucionario.

Los puntos contenidos en la Programática coincidían en algunos aspectos con la visión reformista de la primera Junta, pero lo superaban no sólo en la profundidad de las medidas económicas propuestas, sino también en el carácter autogestor y democrático del cambio esperado.

Durante los meses de enero a marzo de 1980, el movimiento popular no estuvo en receso. Los conflictos en el seno del régimen tuvieron que discutirse frente al espectro de la lucha de masas. En este periodo se reduce la lucha de carácter reivindicativo-económico y las organizaciones populares centran su atención en las acciones de propaganda y agitación. Es un momento de efervescencia organizativa y movilización urbana que se extiende hasta el mes de junio y en el que el objetivo es la acumulación de fuerzas a nivel político. Se suceden ocupaciones de poblados, iglesias y embajadas, así como grandes movilizaciones urbanas y huelgas obreras, todas de carácter agitativo. A la par, comienzan a incrementarse las acciones militares en contra del ejército gubernamental.

La tercera Junta de Gobierno

El subperiodo de la tercera Junta de Gobierno, de la llamada “Junta militar-democrristiana”, que va de marzo de 1980 hasta la elección de la Constituyente en marzo de 1982, se caracteriza por el inicio de las reformas económicas y los primeros pasos para generar a partir de ellas un nuevo sistema político. Este subperiodo debe dividirse en dos fases bien diferenciadas: la primera, hasta enero de 1981, la segunda, desde entonces. El punto de ruptura, la fracasada “ofensiva final” de las fuerzas democrático-revolucionarias.

Primera fase

En el mes de marzo, la estrategia reformista-contrainsurgente delineada por los Estados Unidos se pone en marcha con el anuncio de la Reforma Agraria y el Estado de Sitio simultáneamente. Tomó las riendas una tercera Junta comprometida toda ella con lo planeado.

La estrategia iniciada estaba formada por un conjunto de medidas orientadas a:

- 1] derrotar al movimiento popular, especialmente a su vanguardia armada;
- 2] generar base social de apoyo para la democracia cristiana;
- 3] debilitar políticamente a la vieja clase dominante, y de ser posible someterla a la visión norteamericana.

Se esperaba poder asegurar en el corto plazo:

- a] el control estatal de una parte del excedente económico a fin de reorientar la inversión de capitales y obtener fondos adicionales para gastos militares;
- b] el control militar del territorio nacional para restablecer el monopolio del uso de la fuerza con la destrucción de la vanguardia armada del pueblo;

- c] el estímulo a la inversión de capitales en la industria manufacturera con fondos de la nacionalización y asegurando fuerza de trabajo barata mediante el congelamiento de salarios;
- d] el crecimiento de una clase media rural que permitiese liquidar al movimiento de masas en el campo.

Ya en el primer año, las reformas mostraron sus virtudes y sus vicios, y el plan que las impulsaba, el límite de sus alcances. La Reforma Agraria, reducida por las presiones oligárquicas a sus fases I y III, permitía la organización de un sector campesino que vino a constituir un apoyo decidido a la democracia cristiana, la llamada Unión Comunal Salvadoreña (UCS); sin embargo las reformas alimentaron el desprecio de la oligarquía hacia el partido de gobierno, que fue acusado de “procomunista”. En el plano militar, el ejército no pudo causar daños mayores a la vanguardia armada del pueblo a causa tanto de las prácticas empleadas por la guerrilla, como de las dificultades internas que sufría. Económicamente, y en tanto la inversión se había retraído a causa de elevados niveles salariales, el congelamiento de sueldos trajo consigo más odio del pueblo contra el gobierno. Sin embargo, un sector urbano financiado directamente por los Estados Unidos se pronunció en apoyo a las reformas y junto con la UCS formó la Unión Popular Democrática (UPD). El respaldo que ésta brindó, aunque débil, resultó extremadamente útil al régimen.

Junto a las medidas reformistas, la oligarquía diseñaba su propia guerra. Fuertemente influyente en el ejército, hizo uso de éste, oficial o clandestinamente, en forma de escuadrones de la muerte para iniciar acciones armadas continuas en contra del pueblo, y aun en contra de elementos pronorteamericanos. Estas acciones armadas, que no estaban incorporadas en una visión estratégica, hicieron mucho daño al movimiento popular y a los planes reformistas.

Escuadrones militares y paramilitares atacaron de manera sistemática la retaguardia civil del movimiento popular en la ciudad y el campo; esto provocó más de quince mil muertos en esta fase y cientos de miles de salvadoreños refugiados en los países vecinos o desplazados a zonas donde resulta fácil su control. Esto constituyó un verdadero triunfo, al debilitar el crecimiento de las organizaciones revolucionarias.

Durante 1980 la oligarquía no se sintió representada por el gobierno. Las medidas que éste impulsaba, si bien no afectaban al sistema, sí provocaron el descontento de familias que se sintieron despojadas, y la solidaridad de clase. Ante la presencia de un enemigo en crecimiento, el surgimiento de supuestos amigos que propugnaban reformas como las que los revolucionarios habían predicado durante años, aunque fuese a modo de anticuerpos, no podía menos que provocar la desconfianza de la oligarquía. La aparición de los Partidos de Orientación Popular (POP) y Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), así como el resurgimiento de Conciliación Nacional (PCN) y Popular Salvadoreño (PPS), todos a la derecha del gobierno, sancionó la distancia entre la oligarquía y el partido oficial.

Durante esta fase, la estrategia de las organizaciones populares puede resumirse como la búsqueda de la capacidad para enfrentar la instancia armada del régimen. Todas las acciones confluyeron hacia el intento por constituir una fuerza social, política y militar.

Desde diciembre de 1979, ante lo que se perfilaba como un resquebrajamiento en el seno del régimen, se planteaba entre las organizaciones revolucionarias la necesidad de unificar esfuerzos. Se consideró que había llegado el momento para pasar a otro tipo de lucha, una que condujera a la formación de una fuerza capaz de derrotar militarmente al ejército y

políticamente a la oligarquía.

Para enero de 1980 se anunció la formación de una coordinación político militar que luego se llamó Dirección Revolucionaria Unificada (DRU), y para finales de año se creó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).⁶ Estas instancias actuaron más como un foro de discusión que como conducción única; sin embargo, las acciones que se impulsaron confluyeron en:

- a] el reclutamiento masivo hacia las estructuras militares desde las organizaciones de masa;
- b] el apertrechamiento de armas y municiones a partir de una retaguardia exterior;
- c] la preparación de las primeras fuerzas regulares; y
- d] la incorporación de nuevos estratos sociales al FDR, especialmente de capas medias urbanas.

Entre enero y agosto de 1980 se asistió a las mayores movilizaciones populares en la historia del país. Tres huelgas generales en marzo, junio y agosto, de carácter demostrativo, que conservaron el nivel de agitación urbana y acrecentaron la participación popular, ocupaciones de poblados con objetivos agitativos y de reclutamiento, asaltos y emboscadas de apertrechamiento, fueron las acciones militares en esos meses. Desde agosto hasta diciembre las acciones combinaron, por un lado, el apertrechamiento masivo con la formación técnico-militar para la constitución de fuerzas regulares, y por el otro, la búsqueda del apoyo internacional para el programa democrático-revolucionario.

Esta estrategia tampoco alcanzó todo el éxito esperado: el desgaste de la retaguardia civil de las fuerzas revolucionarias a causa de la represión por un lado y la política de reclutamiento masivo por el otro, redujo sustancialmente la capacidad de movilización de las masas urbanas, devolviendo la calle a las fuerzas del régimen. A finales de 1980 las grandes organizaciones de masas prácticamente habían desaparecido, la coordinación a este nivel perdía su razón de ser y el FDR quedaba en manos de los sectores reformistas. Por otro lado, las estructuras militares no tenían aún la capacidad de absorber masivamente a nuevos combatientes, por lo que se vivieron dificultades en el crecimiento armado.⁷

Más a nivel de cada una de las organizaciones que en el ámbito unitario, para finales de 1980 se habían constituido ya algunas fuerzas regulares y se habían fogueado unidades guerrilleras y milicianas. Con eso, y mucho entusiasmo, se lanzó la ofensiva del 10 de enero de 1981.

Segunda fase

6 El proceso de acercamiento entre las diferentes organizaciones populares no se realizó sin dificultades. Entre ellas existen sustanciales diferencias en lo que se refiere a la percepción del enemigo, la política de alianzas, los medios de lucha, etcétera. Dichas diferencias tienen que ver con el proceso histórico de constitución de cada una de las corrientes que integran el movimiento popular, con el hecho de que cada una de ellas es producto del desarrollo político de una fracción de la sociedad compuesta por elementos provenientes de diferentes estratos económico-sociales.

7 Por otra parte, las condiciones en que se desarrollaba el enfrentamiento armado, la táctica enemiga de eliminar a la retaguardia civil, obligó en muchos casos a una excesiva compartimentación en defensa de las organizaciones, lo que constituyó claros obstáculos para la creación y el funcionamiento efectivo de instancias unitarias en los niveles básico e intermedio.

El movimiento democrático-revolucionario lanza la ofensiva de enero con más entusiasmo que preparación, con más ilusión que fuerza. Así, lo que parecía iba a ser un golpe estratégico apenas asumió un carácter táctico. Se convocó a una huelga general sin la existencia siquiera de un Comité de Huelga, a una insurrección popular en un momento en que el pueblo estaba desmovilizado y no tenía los medios para defenderse, y se intentó derrotar al ejército con fuerzas plenamente inferiores.

La ofensiva fue pensada y anunciada como “final” en un momento en que el movimiento no contaba con la fuerza necesaria para conseguir la victoria, y esto constituyó un error que hubo que pagar caro. Dio al régimen reformista la oportunidad de demostrar que, al menos temporalmente, estaba en capacidad de conjurar el peligro revolucionario. Sin embargo, al expresar el verdadero grado de desarrollo del movimiento, la ofensiva generó avances militares que hicieron modificar la estrategia gubernamental.

A partir del 10 de enero, los rebeldes pudieron constituir una retaguardia interna en Morazán, Chalatenango, Cabañas, San Vicente y Cuscatlán; en estos lugares se asentaron los principales destacamentos armados del FMLN. El control territorial conseguido y la presencia allí de mucha población civil constituyó un gran avance. Lo que para otro tipo de guerra hubiera sido un peso retardador, se convirtió para la revolución en la condición de su supervivencia. La población civil proporcionó todo el apoyo necesario para el crecimiento de los organismos militares, desde la alimentación hasta la sanidad de la región.

La necesidad de consolidar la retaguardia interior, así como la percepción de algunos errores de enero, pusieron al movimiento insurgente en una posición momentáneamente defensiva. La mayoría de las acciones de febrero a agosto de 1981 fueron sabotajes a los servicios públicos y vías de comunicación, en un intento por fortalecer aquellos territorios obstaculizando el avance del ejército gubernamental.

Paralelamente, el movimiento popular reforzaba su trabajo internacional con la creación de una Comisión Político-Diplomática y la instalación de representantes en los principales países occidentales. Se hacía un llamado a la mediación internacional en el conflicto, lo cual fue visto con buenos ojos por la Internacional Socialista. Se da también un importante crecimiento del movimiento internacional de solidaridad. Así, la guerra comenzaba a adquirir matices claramente internacionales.

Desde agosto puede apreciarse la recuperación de la iniciativa militar por parte de la insurgencia, esto es:

- a] la ampliación de los territorios controlados por las fuerzas rebeldes, especialmente en el sureste del país y a partir de golpes basados ya en una retaguardia interior;
- b] el incremento de la capacidad de destrucción material mostrado con la destrucción del Puente de Oro y de una docena de aviones en el propio aeropuerto militar;
- c] la formación de las primeras fuerzas especiales o unidades de vanguardia; y
- d] la intensificación de la propaganda internacional alrededor de lo que se llamó una “solución política negociada”.

En el mes de agosto el FMLN lanzó sus primeras ofensivas importantes desde enero en los departamentos de Chalatenango y Morazán, y en septiembre-octubre, ataques simultáneos en siete de los catorce departamentos del país, entre ellos Usulután, donde comienza a asumir control territorial; en noviembre se intensificó la ofensiva en el oriente y en diciembre vino a añadirse la zona para-central. Durante los primeros tres meses de 1982

mantuvo una ofensiva militar constante. Los objetivos: puestos pequeños del ejército y organismos de seguridad.

En el campo internacional, la alianza opositora, ante el temor de una invasión norteamericana, centró su labor diplomática en construir obstáculos externos, acrecentar la solidaridad y ganar legitimidad. El 12 de febrero de 1981 consiguió una resolución de la Conferencia de Países No Alineados que condenaba cualquier intervención de fuerzas extranjeras en El Salvador, y el 26 de agosto del mismo año, México y Francia reconocían a la alianza FDR-FMLN como fuerzas representativas en el conflicto salvadoreño, en una declaración que constituye hasta el momento el más alto nivel de reconocimiento conseguido.

En el lado del régimen, y a pesar de haber conseguido un respiro con la ofensiva de enero, la desconfianza de la oligarquía hacia el gobierno no disminuyó, lo que se expresó en ambigüedades en cuanto al plan militar: los oficiales prooligárquicos obstaculizaban los planes norteamericanos que consistían en detener el avance insurgente hasta tener preparados batallones especiales que pudieran derrotar al FMLN. Estas ambigüedades fueron aprovechadas adecuadamente por las fuerzas populares.

Después de la ofensiva de enero, el reformismo comprendió que necesitaba de un nuevo ejército, que el “brazo armado” de la oligarquía no era ni técnica ni políticamente capaz de servirle de sostén. Los norteamericanos entendieron que no sólo era necesario incrementar la ayuda militar al gobierno salvadoreño y proporcionarles asesores sino también, y especialmente, preparar tropas especializadas. Tuvo así comienzo la creación de un nuevo ejército del que se esperaba pudiese derrotar al FMLN y apoyar políticamente las reformas.

Entre enero y junio de 1981 las acciones del régimen confluyeron en:

- a] el mantenimiento del control político-militar de las zonas urbanas, donde la ofensiva había sido más débil;
- b] operativos militares de contención de las fuerzas populares en sus zonas de asentamiento, en espera de la llegada de las fuerzas especiales;
- c] la formación de brigadas y batallones especiales, algunas en el país, otras en los Estados Unidos;
- d] el incremento del traslado masivo de población a lugares bajo control gubernamental;
- e] el intento por incorporar a la oligarquía al gobierno, mediante elecciones generales; y,
- f] una contraofensiva internacional basada en el anuncio de elecciones y la acusación de intervención nicaragüense y cubana en ayuda a los rebeldes.

El control político-militar sobre las zonas urbanas fue sumamente relativo. La presencia del FMLN en las principales ciudades del país, si bien no tuvo las manifestaciones de los primeros meses de 1980, se hizo sentir día a día a través de múltiples acciones de sabotaje y agitación: el toque de queda decretado desde ello de enero no detuvo las acciones insurgentes por la noche, aunque hay que anotarle al régimen un punto en cuanto a conseguir aterrorizar a la población civil.

Los operativos militares que lanzaron en estos meses, a Morazán en enero, a San Vicente en febrero, a Cabañas, Chalatenango y Morazán en marzo, a Guazapa y San Vicente en junio, muestran una estrategia de contención en función de las zonas urbanas y en espera de la llegada de las nuevas brigadas. Estos operativos causaron daños a la población civil de las regiones atacadas, aumentando el número de refugiados y afectando a la retaguardia

popular, pero en la medida en que los insurgentes ganaron capacidad para defender a esta población trasladándose con ella, este efecto tendió a aminorar. Sin embargo, la acción militar del régimen logró mantener ocupado al FMLN por largos periodos en ir de un lugar a otro, y eso contribuyó a disminuir su presencia urbana.

Para construir un nuevo sistema político era necesario incorporar a la oligarquía y sus principales voceros al aparato de Estado. La oligarquía buscaba esto a través de la preparación de golpes de Estado que fueron abortados constantemente por la intervención oportuna del gobierno norteamericano, el cual, sin oponerse a la participación de la oligarquía en el gobierno, sí se oponía a un desplazamiento total de la DC. Para los reformistas, la oligarquía debía participar en una posición subordinada.

El intento de golpe de Estado, que se convirtió en algo recurrente, no pudo ser contrarrestado por la decisión gubernamental de dejar en suspenso algunos aspectos de la Reforma Agraria, ya que no era únicamente la política económica el punto de discusión, sino también la conducción de la guerra. El fracaso mismo de las ofensivas militares se achacó generalmente a la DC en el gobierno, de la cual se decía que impedía al ejército tomar acciones más enérgicas. Sin embargo, la estrategia diseñada por los asesores norteamericanos, a pesar de su aparente prudencia, era adecuada. La propuesta oligárquica de una ofensiva total contra el FMLN no era viable y conllevaba demasiados riesgos. Por lo demás, la oligarquía rechazaba también la tutela norteamericana que le había impuesto las reformas y la guerra prudente, y que le disputaba al ejército mismo.

Finalmente, las contraofensivas en el campo diplomático que el Departamento de Estado hizo para el gobierno tampoco dieron resultados especialmente favorables. Los intentos por asimilar la lucha salvadoreña al conflicto este-oeste y acusar a Cuba, Nicaragua y la URSS de pertrechar a los insurgentes se toparon siempre con la dura realidad de años de injusticia social y miseria en el país, con un régimen que asesinaba a mil personas por mes y con la imposibilidad de mostrar una sola arma o combatiente cubano, nicaragüense, soviético... frente al río de armas con que los Estados Unidos contribuían a las acciones militares contra el pueblo.

En el mes de julio entró en operaciones la Brigada "Atlatl", primera entrenada especialmente para combatir al FMLN; su objetivo fueron las posiciones rebeldes en el departamento de Chalatenango. Allí, después de algunos días en que las fuerzas insurgentes parecieron desconcertadas, se libraron batallas después de las cuales la nueva brigada no tuvo un exitoso debut. La "Atlatl" se mostró desde el principio como un cuerpo con mejor entrenamiento y moral de combate que el resto del ejército; sin embargo, en la práctica, sólo vino a llenar el hueco dejado por las bajas que ocasionaba el FMLN.

Así, las ofensivas lanzadas sobre Chalatenango y Cabañas en julio, Morazán en agosto, Usulután y Chalatenango en septiembre y octubre, San Vicente en noviembre, Morazán y Chalatenango en marzo, animadas todas ellas por el propósito de aislar a la población civil del ejército popular, constituyeron nuevos fracasos. Las fuerzas revolucionarias soslayaron en lo posible los enfrentamientos, retirándose para atacar líneas de abastecimiento y la retaguardia enemiga, utilizando las emboscadas y las acciones de diversión. Para enero de 1982 la brigada "Atlatl" estaba sobretrabajada, había perdido a una cuarta parte de sus efectivos y se veía necesaria la creación de nuevos batallones. En el ámbito político, los fracasos militares acentuaron el odio de la oligarquía contra el gobierno, que ante la presión había cedido hasta en aspectos cruciales de la Reforma Agraria y se negaba a cualquier diálogo con los insurgentes. Para marzo de 1982 éste no podía hacer más concesiones

porque ya casi había cedido en todo y lo militar no estaba en sus manos.

El reformismo

Una vez decretadas las tres reformas económicas, la principal de ellas, la agraria, fue mutilada por los mismos reformistas. Se llegó así al nivel de lo máximo que la oligarquía podía aceptar como condición para participar en la creación de un nuevo sistema político, es decir, para ir a elecciones generales y dar allí la batalla contra la democracia cristiana. Con ello, el reformismo había ganado un punto.

Sin embargo, la situación militar le era más desfavorable al no haber podido contener los avances del FMLN en las zonas rurales, y la esperada reactivación industrial no llegaba.

Por su parte, el FMLN crecía y avanzaba en el área rural y el campo internacional, pero perdía influencia y presencia ante las masas urbanas que sufrían los efectos del congelamiento salarial, el desempleo y la inflación. Se comenzaba a hablar de un distanciamiento entre la alianza democrático-revolucionaria y el pueblo.

EL PERIODO DE LA ASAJABLEA CONSTITUYENTE

El periodo de la Asamblea Constituyente y el presidente provisional, entre abril de 1982 y junio de 1984, se caracteriza por la utilización de instrumentos políticos en la lucha entre las dos visiones dentro del régimen, por el decantamiento de éstas y por el crecimiento de la oposición armada.

Las grandes fuerzas beligerantes que se constituyeron en el periodo no sufrieron transformaciones profundas. Sí continuaron las luchas intestinas y hubo escisiones y cambios en la correlación interna de cada fuerza. Serán éstos los que darán nuevos matices a las visiones en juego.

El carácter internacional del conflicto bélico se hará cada vez más evidente, al igual que la conducción de los Estados Unidos sobre la política nacional. La guerra seguirá siendo el operador básico de la vida social.

Las elecciones

Para el 28 de marzo de 1982 el régimen había programado elecciones de diputados a una Asamblea Constituyente; a través de ellas se incorporaría a representantes de la oligarquía en el gobierno y se buscarían avances político-diplomáticos. Las elecciones mismas fueron presentadas como el instrumento para conseguir la paz, oponiéndolas así al llamado de las fuerzas rebeldes a un diálogo sin condiciones.

La preparación de las elecciones se convirtió en una potente arma política. No fueron pocos los países que percibieron en ellas una esperanza; contaban con el claro apoyo de la Iglesia y eso les garantizaba un buen número de electores. Así, el 28 de marzo, la distancia entre el movimiento democrático-revolucionario y el pueblo se hizo sentir: imposibilitados de otro tipo de participación política como la de dos años atrás, miles de hombres y mujeres depositaron su voto en la mayor parte de los municipios del país. Algunos por temor a las represalias, otros porque apoyaban a un partido u otro, los más porque creían que había allí

un camino hacia la paz.

El 28 de marzo se daba un paso importante en la construcción del sistema político que había de legitimar lo que quedaba de las reformas. La posición de la alianza FDR-FMLN hacia el evento electoral fue de rechazo. Argumentaba que no había condiciones para su realización, que se trataba de una comedia y que no resolvería los problemas del país. Ante las elecciones, se enfatizaba la propuesta de diálogo, y no faltó quien llegara a pensar que el partido que ganara las elecciones tendría que sentarse a la mesa del diálogo con la oposición armada. Pero los rebeldes también anunciaron actos que no pudieron cumplir: el boicot al proceso electoral.

El 28 de marzo fueron atacados varios sitios de votación, hubo enfrentamientos armados en Santa Ana, Chalatenango, Usulután, Guazapa y la periferia de San Salvador; sin embargo, a excepción de Usulután que estuvo bajo asedio insurgente durante tres días, en todas las otras ciudades importantes se efectuaron las elecciones con relativa normalidad.⁸ Al fracasar el intento por impedir las elecciones, el régimen tuvo un espacio político a su disposición.

El 29 de marzo se sabía que la DC encabezaba los resultados electorales pero no alcanzaba una mayoría frente a la derecha coaligada; el día 30, los cuatro partidos de oposición anunciaban su unidad contra la DC y se abría un periodo de luchas intestinas. El árbitro: los Estados Unidos.

Las negociaciones que siguieron a las elecciones de marzo dieron a la oligarquía una importante cuota de poder, pero para conseguirlo tuvieron que consentir la presencia de la DC en el gobierno. Las elecciones habían dado a la vieja clase dominante una mayoría en la Constituyente; sin embargo era una mayoría dividida en tres partidos cuyo punto de acuerdo, más que un proyecto político acabado, era el desprecio a las reformas, a la democracia cristiana y quizás especialmente a Napoleón Duarte. Ése fue su primer elemento de unificación y el 22 de abril Roberto D' Abuisson fue electo presidente de la Constituyente y la derecha ocupó todos los puestos directivos. En la Asamblea, la DC estaría en la oposición.

A cambio de esto, los Estados Unidos negociaban el ejecutivo y consiguieron para un hombre de su confianza, pero no demócrata cristiano, la presidencia provisional. Álvaro Magaña fue nombrado el 29 de abril, y el 4 de mayo se anunciaba un reparto de ministerios que dejaban a la DC en clara desventaja. Educación, relaciones exteriores y trabajo fue todo lo que la diplomacia yanqui pudo arrebatarle a la oligarquía para sus protegidos. A esto se le llamó “gobierno de unidad nacional”.

El periodo de la Constituyente

La Asamblea Constituyente se convirtió en foco de atención política, no tanto por lo importante que pudiese ser su gestión cuanto porque era el punto donde se hacían visibles las luchas intestinas, las escisiones, las alianzas, las recomposiciones de fuerzas, los programas, etcétera. Durante el periodo pudieron visualizarse dos escisiones del Partido de Conciliación Nacional (PCN); una tomó el nombre de Partido Auténtico Institucional Salvadoreño (PAISA) y la otra el de Movimiento Estable Republicano Centrista (MERCEN); estas escisiones dieron lugar a nuevos bloques dentro de la Asamblea. En

⁸ El balance fue que veintidós localidades pequeñas no abrieron votación; constituían el área de control rebelde.

algún momento la DC se alió con P AISA para derrocar a la directiva de la Constituyente, pero esa alianza duró poco; en otro caso ARENA y PAISA se aliaban para impedir que la DC y el PCN disminuyeran el poder legal adquirido por D'Abuisson; en fin, amores fugaces en busca de un objetivo miserable y constantes rompimientos marcan la historia de la Constituyente.

Sin embargo, la Asamblea, más que servir para elaborar una nueva Constitución, fue útil al régimen pues allí se decantaron la visión reformista-contrainsurgente y la visión oligárquica. Éstas se encuentran ahora mucho más cercanas que entonces. Pero para profundizar en ello se hace necesario un *détour*, un compás de espera.

CONTRAOFENSIVA INSURGENTE

Pasadas las elecciones, el enfrentamiento armado vuelve a acaparar la atención del país. El nuevo gobierno rechaza cualquier diálogo con la insurgencia y responde con constantes operativos militares. En junio se abre una etapa de lucha que encontrará tregua hasta abril de 1983; será una etapa marcada por el claro avance militar del FMLN y un obligado repliegue del ejército.

En mayo de 1982 regresaron al país los batallones “Atonal” y “Ramón Belloso”, entrenados en los Estados Unidos. Ellos y la “Atlacatl” constituyeron el grueso de la fuerza operativa con que el régimen contó en esta etapa para intentar detener el avance insurgente y eventualmente derrotarlo.

En junio de 1982 el FMLN hizo los primeros prisioneros de guerra en la provincia de Morazán. Se abría una nueva fase en la guerra. Entre junio de 1982 y abril de 1983, el FMLN mantiene la iniciativa militar en todo el país. Esto es claro al constatar:

- a] la capacidad para aniquilar posiciones menores y medianas en Chalatenango y Morazán, debilitando la presencia de las fuerzas armadas, ampliando el terreno controlado e incrementando la recuperación de pertrechos;
- b] la capacidad para capturar, mantener y liberar prisioneros de guerra;
- c] el inicio de acciones coordinadas que se logran articular en forma de “campañas” a nivel nacional;
- d] la creación de agrupamientos militares capaces de operar a nivel nacional con un alto poder de fuego, y
- e] la utilización cada vez más efectiva de artillería liviana y semipesada.

El 5 de junio de 1982 comandos insurgentes atacaron las posiciones militares de Perquín; un día después habían ocupado el pueblo y ampliaban el asedio a las posiciones en Joateca, Osicala, Torolá y Arambala, todas en Morazán. El día 22 el FMLN anunciaba su retiro de las localidades ocupadas y el inicio de una campaña de destrucción de medios de transporte. De aquí en adelante, los rebeldes ocuparían las poblaciones del norte de Morazán cuantas veces quisieran, liberando este terreno de manera franca en octubre del mismo año.

El 26 de junio de 1982 el FMLN ocupó los poblados de El Carrizal y Ojos de Agua, al tiempo que atacaba El Jícaro, Las Vueltas y La Laguna, en Chalatenango; comenzaba así el

proceso que liberaría en los siguientes dieciocho meses a treinta municipios en el departamento.

Las zonas bajo control insurgente en Chalatenango y Morazán se ampliaron rápidamente gracias a importantes triunfos militares. Sólo en el mes de junio, en Morazán, el ejército gubernamental sufrió 600 bajas y perdió 160 armas, y el FMLN hizo 43 prisioneros de guerra, incluyendo al propio viceministro de Defensa. La ampliación de territorios generó las condiciones para mantener prisioneros por largos periodos y entregarlos a organismos humanitarios internacionales, lo que significó un tácito reconocimiento del FMLN por parte de esos organismos.

La captura de prisioneros también actuó negativamente en la moral del ejército. Después que se conoció el trato dado a esos prisioneros, también fue claro para muchos soldados gubernamentales que entregarse al FMLN en medio de un combate desventajoso constituía una forma segura de salvar la vida. A partir de este momento, la moral de combate de las tropas tendió a disminuir, las rendiciones crecieron y los altos mandos añadieron una más a la ya larga lista de dificultades en que se hallaban.

La ampliación de territorios también generó nuevos problemas al FMLN, problemas especialmente relacionados con la protección de la población civil y su sustento; éstos fueron enfrentados a través de la creación de los llamados “poderes populares locales”.⁹

En octubre de 1982 se iniciaron acciones coordinadas entre las diferentes organizaciones político-militares que logran articularse como campañas, y éstas continuaron hasta enero, momento en que el control territorial es el mayor conseguido durante el periodo.

Junto a los avances en el campo militar, la alianza opositora se mostró activa en el terreno diplomático, obteniendo el apoyo de muchas naciones a su propuesta de “diálogo”. En octubre de 1982, propuso este diálogo sin condiciones previas y sin cese al fuego, lo que encontró eco en muchos países y vino a reforzar las gestiones de paz que iniciaba entonces el grupo Contadora. Sin embargo, el gobierno salvadoreño rechazó dicha propuesta y lo mismo hizo el gobierno de los Estados Unidos.

Los avances militares en la zona norte y sureste no fueron acompañados de avances políticos. La propuesta de diálogo, si bien contribuyó a generar fricciones en el campo dominante y encontró eco en algunos sectores sociales como la Iglesia y los sindicatos, nunca pudo articular un movimiento urbano que pudiese reforzar la posición democrático-revolucionaria de las masas. Intentos que pudo haber en este sentido fueron rápidamente liquidados por medio de la represión.

A principios de 1983, si bien los avances militares habían sido importantes, se percibía un estancamiento en la lucha política. Por lo demás, en los próximos meses se caería nuevamente en un bache en el terreno armado.

Entretanto, el régimen surgido de las elecciones del 28 de marzo se había propuesto:

⁹ Desde 1981 venían generándose organismos locales de poder popular formados en su mayor parte por población civil presente en los lugares de asentamiento de las Fuerzas Armadas Populares, éstos cumplían funciones de apoyo a los destacamentos armados y de organización de la vida en pequeñas comunidades, especialmente en lo que se refiere al abastecimiento de alimentos. A partir de 1982, al expandirse el control geográfico y crecer la población incluida en las zonas controladas, empiezan a enfrentarse nuevos retos en el área de la salud, la educación, el comercio internacional, la producción comunitaria, la seguridad, etcétera. Comienza entonces a organizarse en las zonas a la totalidad de la población para las diferentes tareas de sobrevivencia y eso se convierte en una notable fuente de crecimiento para el FMLN y en una experiencia sin precedentes en El Salvador.

- 1] profundizar en la construcción del sistema político, anunciando nuevas elecciones;
- 2] recuperar terreno en lo internacional con el anuncio electoral, ofreciendo amnistía para los presos políticos y formando dos comisiones especiales, una de paz, otra de derechos humanos; y
- 3] readecuar la estrategia de guerra en medio de fuertes disputas sobre cómo enfrentar al FMLN.

Dentro del ejército gubernamental se discutían dos estrategias de lucha. La primera, impulsada por los oficiales ligados a ARENA, proponía una ofensiva total y sin descanso, arrasando las zonas de control insurgente y garantizar una victoria en el corto plazo; la segunda, la de los oficiales ligados a la embajada norteamericana, tenía como objetivo principal la contención del FMLN; pensada a más largo plazo, esta última esperaba ahogar las líneas de abastecimiento rebelde, contener a los insurgentes y fijarlos en regiones conocidas, apartándolos de la población civil para luego aniquilarlos con el apoyo de los batallones especiales.

Dentro de esta última, que fue la que se impuso, podían observarse dos variantes: por un lado, los jefes de los batallones especiales consideraban que su función principal debería estar orientada a actividades de contrainsurgencia y no de guerra regular, bajo la forma de utilización de pequeños grupos que pudiesen penetrar en las zonas de control rebelde y causar daños menores tendientes al desgaste y la contención. Por el otro lado, el alto mando consideraba que la contención iba a conseguirse por medio del uso masivo de los batallones en forma regular, ya que unidades pequeñas podían ser fácilmente aniquiladas en un terreno demasiado adverso.

Las acciones que el ejército impulsó entre junio de 1982 y abril de 1983 estuvieron fuertemente marcadas por esta dualidad y ello operó en contra de su propia efectividad y coordinación.

El 31 de mayo, se inició un operativo contrainsurgente en el departamento de Chalatenango, donde fue enviado el batallón Atonal. Para esta operación el ejército utilizó bases en Honduras, desde donde incursionó en la zona fronteriza de Los Filos y La Cañada, asesinando a unos seiscientos campesinos. La operación finalizó el 8 de junio, e inmediatamente se inició una nueva operación sobre Morazán, donde las brigadas Atlacatl y Belloso perdieron cuatro helicópteros; el 5 de julio terminaba esa ofensiva y el ejército tuvo que ocuparse nuevamente de Chalatenango, donde el FMLN había tomado cinco poblados.

Entre junio de 1982 y abril de 1983 esta historia se repetiría una y otra vez. El ejército iría de un lado para otro del país respondiendo de una manera casi improvisada a iniciativas rebeldes. A Chalatenango, a Guazapa, a San Vicente, a Usulután, a Morazán, y con cada ofensiva conseguía desalojar al FMLN durante un par de semanas, con un costo material y moral que ya para enero de 1983 comenzaba a pesar.

Las diferencias políticas que se debatían en el seno del régimen encontraban su expresión en el ejército, e influían negativamente su operatividad. No existía una estrategia y táctica unificada en los mandos, había desconfianza entre los oficiales de las diferentes armas e incluso intereses de enriquecimiento personal que contribuían a disminuir la capacidad de fuego en los operativos. Así, los fracasos frecuentemente eran achacados a la falta de apoyo de alguna de las tres armas que no se podían combinar, la estrategia de contención

misma sufría severas críticas a causa del elevado número de bajas que sufrían los batallones, y esto alimentaba la virulencia de la oligarquía en contra incluso de los asesores norteamericanos. Para finales de 1982 se percibía la existencia de dos ejércitos fundidos en un solo cuerpo, el ejército oligárquico creado en el siglo XIX y comprometido totalmente con el proyecto agroexportador, incapaz de enfrentar al FMLN; y el ejército contrainsurgente en formación, bajo la dirección de oficiales pronorteamericanos, adiestrado principalmente en el exterior, y cuya relación con la oligarquía no era de supeditación; un ejército construido para apoyar militarmente al reformismo.

Había también una división del trabajo entre ellos: el ejército contrainsurgente debía ocupar el teatro de guerra (las zonas oriental, para-central y norte del país), mientras el ejército oligárquico cuidaba la retaguardia (zonas occidental y central).¹⁰ La estrategia de contención se imponía y ahora era necesaria una visión discriminatoria de los objetivos militares y las zonas de control; se incorporaban elementos sociopolíticos al diseño militar.

Se trataba de distinguir, en el teatro de guerra, aquellos territorios a los que había que dirigirse como fuerza de aniquilamiento y recuperación del espacio físico, y aquellos a los que había que ir como fuerza de recuperación del espacio físico y social. Los lugares donde estaba presente el FMLN fueron así divididos en dos tipos: los que no eran económicamente importantes y que al mismo tiempo no eran socialmente recuperables para el régimen, es decir, donde toda la población civil estaba definitivamente del lado de los rebeldes, y los que tenían importancia económica y que todavía podían o debían ser recuperados socialmente a través de medidas desarrollistas, es decir, donde se intentaría incorporar a la población civil al esquema reformista-contrainsurgente.

Curiosamente, las primeras coincidían con los más fuertes bastiones del ejército popular; sobre ellos habían de lanzarse operativos de aniquilamiento, bombardeos de artillería y aéreos más o menos indiscriminados y con destrucción de todo medio de producción que pudiese abastecer al FMLN.

Ahora bien, para lanzar dichos operativos, el ejército gubernamental tenía que desocupar la zona. A partir de octubre, y ante los avances del FMLN, comienza el repliegue militar de los puestos que mantenía el ejército cerca de las grandes concentraciones rebeldes, abandonando pueblos y dejando el terreno libre a los insurgentes. En marzo de 1983, al norte de Morazán y oriente de Chalatenango no quedaban puestos militares gubernamentales: habían sido corridos por el FMLN o se habían replegado ellos mismos.

Las segundas zonas eran de más reciente control insurgente, en donde las unidades de combatientes no estaban muy desarrolladas; sobre ellas habría que lanzar operativos tendientes no sólo a destruir físicamente al movimiento sino también a ganar para sí a la población.

De esta forma, los bombardeos generalizados y la destrucción indiscriminada serían viables en aquellos territorios (Chalatenango, Morazán, Guazapa) que tienen tan sólo un interés geográfico; en los que podían ser recuperados como espacio social (San Vicente, Usulután) los medios de aniquilamiento sólo tendrán sentido combinados con la Acción Cívico-Militar. Esta visión comenzó a operar en el mes de mayo de 1983 con el programa llamado “Bienestar para San Vicente”.

En el campo político el régimen intentó ganar la iniciativa. Había logrado realizar unas

10 Paradójicamente, el sector militar que supuestamente debía defender las reformas es aquel obligado al combate diario, mientras que el sector oligárquico, en la retaguardia, tenía la oportunidad de estar más cerca de la política diaria, obstaculizando en lo posible a los reformistas.

elecciones, instalar una Asamblea Constituyente y forjar algunos acuerdos para formar el gobierno de “unidad nacional”. El 3 de agosto de 1982 los cuatro principales partidos políticos firmaron el llamado “Pacto de Apaneca” en donde se delineaban ya algunos compromisos que habían de permitir el funcionamiento de un gobierno plural y al mismo tiempo habrían de dar comienzo a dos procesos: pacificación y democratización.

La pacificación y democratización tenían para el régimen un significado particular: se daría la oportunidad para que la izquierda radical depusiera las armas [pacificación], se acogiese a una amplia amnistía y se integrase al proceso político que la llevaría a elecciones [democratización]. En realidad no se esperaba que el movimiento popular aceptara sus propuestas, pero sí de oponerlas al diálogo.

Se habló de decretar una amplia amnistía que incluyera a los alzados en armas, los presos políticos y los exiliados, de la realización en 1984 de elecciones presidenciales, de la entrega de las instalaciones de la Universidad a sus autoridades, etcétera, y de una u otra manera todo ello fue cumplido por el gobierno de Álvaro Magaña. Como contrapartida, la oligarquía aceita nuevamente a sus escuadrones de la muerte; mientras se anunciaba la voluntad de pacificación y democratización, éstos multiplicaban sus crímenes sin que nadie los pudiese controlar, incluyendo al mismo gobierno que intentaba mostrar distancia ante ellos.

GUERRA SOCIAL

En abril de 1983 el FMLN disminuyó fuertemente su accionar militar para incrementarlo hasta septiembre. Fueron las tácticas diseñadas por el régimen las que por el momento se mostraron en toda su capacidad. Entre abril y agosto las fuerzas gubernamentales se preocuparon principalmente por lograr éxitos político-militares en su plan “Bienestar para San Vicente”, y secundariamente por contener al FMLN, continuando con la preparación de unidades especiales.¹¹

En el mes de junio, el ejército gubernamental dio inicio a dos operativos de carácter diferente, uno sobre Guazapa, tendiente a liquidar los asentamientos rebeldes, y otro en San Vicente, este último con objetivos desarrollistas.

“Bienestar para San Vicente” era un operativo planificado en dos etapas: la primera consistía en la destrucción de los campamentos guerrilleros de la zona, la segunda en la reconstrucción con mejoras sociales para la población, el repoblamiento con refugiados de otras zonas y la estructuración de defensa local dirigida por el ejército pero ejecutada por la propia población. Si el plan tenía éxito, iba a iniciarse otro similar en Usulután, al término del cual las unidades rebeldes no sólo quedarían diezmadas sino aisladas en la franja norte del país, donde podían ser eventualmente liquidadas.

La primera fase del plan se desarrolla a medias: el ejército ocupó el volcán de San Vicente hasta la cima pero no encontró al FMLN, que se había replegado junto con la población civil y se dedicaba a golpear las líneas de abastecimiento del ejército, causándole numerosas bajas. Entretanto, cada vez que se intentaba disminuir la fuerza de ocupación (unos cuatro mil hombres) la insurgencia se hacía presente amenazando reinstalarse en el

11 Según cálculos aproximados, para finales de 1984, el ejército de 1979 prácticamente habrá desaparecido, sustituyéndolo un nuevo ejército, entrenado en las condiciones impuestas por los Estados Unidos.

volcán, por lo que esta fuerza se encontró fijada aun cuando parecía necesaria en otros lugares. Además, el régimen no encontró población civil sobre la cual aplicar su acción cívica, ni tampoco refugiados que se animaran a asentarse en la zona en esas condiciones, de modo que la segunda etapa terminó siendo un pequeño reparto de víveres que llegaron a manos del FMLN y el arreglo de baches en caminos vecinales. Para agosto-septiembre el ejército tuvo que retirarse del volcán, y lo hizo dejando pequeñas guarniciones que actualmente ya no existen. La insurgencia volvería cautelosamente y poco a poco a ocupar sus antiguas posesiones.

En julio, el ejército lanzó operativos de aniquilamiento contra posiciones rebeldes en Chalatenango, Morazán y el norte de San Miguel, movilizand o a un 70% de sus efectivos en fuertes ataques simultáneos; sufrieron la embestida seis zonas de control rebeldes y el FMLN tuvo que abandonar algunas posiciones para evitar el choque frontal, y en algún momento, desarticular unidades grandes, postergando planes de ataque.

Paralelamente, en el mes de mayo se decretaba la amnistía, parte del plan de pacificación, que sirvió al régimen para liberarse de un peso muerto que eran los viejos presos políticos, los cuales deterioraban su imagen y no le eran útiles.

Entre abril y agosto de 1983, el FMLN sólo realizó dos operaciones de importancia: la toma del cerro de comunicaciones de Cacahuatique en Morazán y la ocupación de Tenancingo en Cuscatlán, ambas en el mes de junio. El resto del periodo, la insurgencia asumió una actitud más bien defensiva, lo cual es comprensible a partir del desarrollo inmediato anterior de la guerra y de algunas dificultades de carácter interno.

Como se ha indicado antes, durante los últimos meses de 1982 el FMLN mostró capacidad para la destrucción de puestos pequeños y medianos del ejército situados cerca de sus lugares de asentamiento; la estrategia diseñada se orientaba principalmente a estos puestos con el propósito de limpiar vastas regiones de la presencia del ejército gubernamental. A partir de octubre de 1982, la fuerza armada comienza a “abandonar” la mayoría de ellos, de modo que para abril de 1983 ya no había prácticamente ningún puesto pequeño o mediano al alcance del FMLN. Los destacamentos que habían quedado en las cercanías de sus asentamientos, El Paraíso, Gotera, Suchitoto, etcétera, eran demasiado grandes para ser tomados, y los pequeños y medianos estaban a una distancia que le requería a la insurgencia una movilización superior a sus recursos. Así, ya en abril el FMLN sintió agota a su estrategia, quedando con sus fuerzas “en el vacío”, es decir, sin objetivo inmediato.

Habría que sumar otros factores que contribuyeran a la pasividad de las fuerzas populares en el periodo. En primer lugar, los conflictos internos suscitados en las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) a raíz de la muerte de sus dos primeros responsables las obligó a disminuir su accionar militar;¹² en segundo lugar, la traición cometida por el comandante Alejandro Montenegro del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) afectó algunas líneas de abastecimiento y obligó a modificar ciertas estructuras; y en tercer lugar, el plan “Bienestar para San Vicente” puso a las fuerzas populares en una actitud expectante.

En estos meses, el FMLN habría de adecuarse a las nuevas condiciones que presentaba la guerra, constituyendo agrupamientos militares de gran poder de fuego y movilización y diseñando una nueva táctica para los próximos meses.

12 Las muertes de Marcial y Ana María provocaron, entre otras cosas, una verdadera “crisis de liderazgo” dentro del movimiento, que se expresó en la dispersión de muchos cuadros políticos y que todavía no ha podido ser superada.

Los diseños político-militares

En el mes de septiembre era ya evidente que las tácticas diseñadas por el ejército para lograr los objetivos de aislamiento del FMLN y el control de la población civil no daban resultado. Los operativos lanzados sobre Guazapa, Chalatenango y Morazán no causaron graves daños a los insurgentes, pero sí permitieron que éstos atacaran con éxito a unidades en movimiento. Esos operativos obligaron al ejército a comprometer gran cantidad de sus efectivos y a sobre-trabajar a los batallones especiales, logrando sólo desarticular temporalmente algunas concentraciones rebeldes. En general, el FMLN ocupó nuevamente todas las zonas e incluso las amplió. El programa “Bienestar para San Vicente” no alcanzó un éxito tampoco; ya en septiembre el FMLN se mantenía activo en el volcán y controlaba grandes tramos de la carretera Panamericana y Litoral. Ahora, el diseño militar se hallaba en problemas.

En el mes de noviembre de 1983, bajo presiones de la derecha, se realizaron cambios en el Alto Mando de la fuerza armada que llevaron a oficiales ligados a la oligarquía a escalar posiciones de mando militar, en lo que pareció una respuesta al fracaso del diseño estratégico norteamericano. Sin embargo, de estos cambios no sobrevino un nuevo enfoque sino la vuelta a las mismas tácticas de 1982, aunque ahora con un mayor poder de fuego y coordinación.

Para diciembre, el ejército inició el más vasto operativo contrainsurgente hasta la fecha: once de los catorce departamentos del país fueron escenario de guerra y veinte mil efectivos militares (el 100% de su fuerza operativa) movilizados en contra del FMLN, en lo que parecía lo más cercano que pudiese darse a la visión oligárquica de una ofensiva total. El FMLN reaccionó dando golpes contundentes y las operaciones tuvieron que suspenderse.

En enero de 1984 había quedado establecido que ni el diseño de los asesores norteamericanos, ni el diseño oligárquico generaban avances militares importantes. Parecía que la única posibilidad de derrotar al FMLN radicaba en la utilización de fuerzas extranjeras.

El *impasse* militar no constituía el único problema al que se enfrentaba el régimen: en los últimos meses de 1983, acicateado por el deterioro del nivel de vida, el movimiento reivindicativo urbano comenzó a ser un factor a tomar en cuenta y el gobierno tuvo que incrementar la represión en la ciudad capital. Recomenzó entonces la persecución y el desaparecimiento sistemático de dirigentes sindicales y gremiales, lo que comprometía el plan de “democratización” en un momento en que se había apostado a las elecciones de marzo. Los escuadrones de la muerte aceleraron su actividad de manera pública y crecieron las tensiones dentro del régimen.

Tal parece que para inicios de 1984, el régimen no contaba ni con un plan militar ni con un plan político, y que ponía sus esperanzas en la invasión extranjera y las elecciones de marzo.

Entre septiembre de 1983 y marzo de 1984 los avances militares del FMLN se hacen sentir nuevamente, pero sin resolverse algunos problemas tácticos fundamentales.

El 3 de septiembre, con el ataque al cuartel de San Miguel, dio inicio una campaña militar que incluyó a unidades pequeñas en movimiento y objetivos militares de mediana y gran importancia; durante esta campaña se mostraron las bondades de los agrupamientos

combinados con la recuperación de mucho material de guerra y el crecimiento de las bajas causadas al ejército. En diciembre, el FMLN asaltó y destruyó el primer cuartel en la historia de la guerra, El Paraíso, en Chalatenango, y comenzó el año de 1984 botando el puente Cuscatlán, el mayor del país.

Las acciones de estos meses dejan ver:

- a] una mejor coordinación entre las diferentes organizaciones del FMLN;
- b] un crecimiento en la capacidad de fuego con el uso masivo de artillería; y
- c] un crecimiento en la capacidad de movilización de grandes contingentes.

En el plano político internacional, sin embargo, y desde los sucesos de abril, comenzó a darse un enfriamiento del apoyo a la insurgencia. El manejo que se hizo de la muerte de los comandantes Marcial y Ana María, las diferentes versiones “oficiales” que sobre ello circularon y el aparente desprendimiento del sector obrero de las FPL a raíz de esos sucesos comenzaron a generar desconfianza en algunos de los grupos que habían apoyado sin reservas al movimiento popular. Por otro lado, la ausencia de nuevas propuestas políticas a la comunidad internacional y la aparición de iniciativas de paz de carácter regional como Contadora, generaron una situación en la que los apoyos a la alianza FDR.FMLN parecieron trasladarse a esas iniciativas. Al apoyar más la solución regional que la nacional, los miembros de la comunidad internacional apoyaban indirectamente la visión norteamericana de regionalización y dejaban al FDR-FMLN prácticamente desamparado.

En el mes de febrero de 1984 la alianza intentó retomar la iniciativa política internacional con una nueva propuesta, la de constituir un Gobierno Provisional de Amplia Participación (GPAP), que no era más que una versión moderada del Programa Democrático Revolucionario. El objetivo de la propuesta parece haber ido encaminado a poner obstáculos a lo que entonces parecía como una inminente invasión norteamericana y a oponerse al llamado a elecciones del gobierno salvadoreño. Sin embargo, la propuesta, en vez de constituir un avance político, sólo mostró sus debilidades; ni pudo romper el hielo y mediatizar las visiones regionales, ni tampoco generó en el país un apoyo organizado capaz de oponerse a las elecciones.

El reformismo oligárquico

Volvamos ahora al análisis de las visiones políticas en juego y retomemos el hilo de los acontecimientos desde la instalación de la Asamblea Constituyente. Antes se había adelantado la hipótesis de que la vida de la Constituyente fue útil al régimen pues allí se decantaron la visión reformista contrainsurgente y la visión oligárquica, que se encuentran actualmente mucho más cercanas que hace dos años.

El periodo de la Constituyente fue un periodo de gobierno compartido entre los representantes de ambas visiones y en el que los reformistas se hallaron en minoría dentro del aparato estatal; era de esperar que en esta situación la mayoría conservadora tomara las medidas necesarias para revertir las reformas económicas que aún quedaban. Legalmente estaba en la capacidad de hacerlo al dominar la Asamblea y controlar los ministerios relacionados con el funcionamiento de la economía. Sin embargo eso no sucedió. Por el contrario, la constitución de 1983, si bien pone obstáculos a nuevas medidas reformistas, no

invalida los decretos de 1980.

Ciertamente la presión que Estados Unidos ejerció sobre la oligarquía pesó sobremanera en la imposibilidad de anular aquellos decretos, pero junto a ella estaba actuando un proceso de recomposición de la vieja clase dominante en función de la visión reformista. El grado a que ha llegado éste todavía no se puede medir, pero sí constituye *el complemento necesario al proyecto norteamericano: la creación de una burguesía “no oligárquica” capaz de imponer una hegemonía.*

Para poder acercarse a este proceso es necesario tener en cuenta las características específicas de la oligarquía salvadoreña. Ésta se forma en base a un sector ligado a la propiedad del suelo, agroexportador y con intereses financieros; dicho sector fue el principal impulsor de la industria sustitutiva en los años cincuenta y controla el área de bienes de consumo no durables de la economía urbana.¹³ No se trata pues de un grupo económicamente tradicionalista y conservador; su imagen no es la del rancharo o el señor feudal, sino por el contrario la del empresario moderno que utiliza técnicas de avanzada tanto en la tierra como en las actividades financieras e industriales y cuyos hijos se han educado en Harvard o Chicago en administración de empresas o economía.

Ciertamente existe un grupo de terratenientes tradicionales y ultraconservadores cuya imagen se asemeja más a la del feudal. Pero su influencia económica no es fundamental en el país.

Alrededor de las actividades agroexportadoras fueron surgiendo también empresarios capitalistas no arraigados al suelo sino ligados a la industria, el comercio o la construcción, pero dependientes financieramente de los primeros. Entre éstos y aquéllos hubo diferencias en torno a la cuestión de la tierra pero ninguno de los dos generó un aparato político propio. Los partidos tradicionalmente gobernantes reflejaron siempre lo que tenía de modernizante el interés oligárquico.

Las diferencias que pudieron existir entre estos grupos tampoco encontraron un reflejo mecánico en el ámbito de las ideologías. Al construir una sociedad plenamente basada en la explotación del suelo y la agroexportación, la oligarquía infundió su ideología al resto de los grupos burgueses, sometiéndolos no sólo económicamente.

Es hasta 1981 que la clase dominante construye su propio partido, ARENA y lo hace sobre la base del apoyo conseguido no sólo de las catorce familias, sino precisamente de esos sectores industriales, comerciales y capas medias generadas en décadas pasadas con los ingresos secundarios de la agroexportación. ARENA se constituye así en el único partido de clase que existe actualmente dentro del sistema político; fue construido para oponerse al reformismo en general pero en la práctica su función ha sido la de limitar los posibles alcances de las reformas económicas. De hecho, éstas no se encuentran ya en discusión. Creemos pues que la oligarquía salvadoreña ha aceptado el reformismo tal y como se puso en práctica: limitado a tres áreas de la sociedad y mutilado en aspectos primordiales, pero que no ha aceptado a la democracia cristiana como vanguardia del mismo.¹⁴ Existen suficientes evidencias para pensar que la clase dominante está cediendo

13 Cf. Ernesto Richter, *Proceso de acumulación y dominación en la formación sociopolítica salvadoreña*. OSUGA, San José, mimeo, 1977.

14 Además, estos cinco años han sido excepcionalmente educativos para la clase dominante. Exiliada provisionalmente en los Estados Unidos se ha visto enfrentada a la competencia capitalista con inversionistas de todo el mundo y ha conseguido abrirse paso en ese ambiente, modernizando aún más sus puntos de vista sobre el desarrollo capitalista. La influencia que sobre ella ha tenido el exilio cubano en Miami también

en su visión de 1981. Esto sería posible en los siguientes campos:

- a] en lo militar, parece haber reconocido, al menos parcialmente, que una ofensiva total contra el FMLN no conlleva un triunfo inmediato y que se necesita del apoyo norteamericano para una victoria;
- b] en lo económico-social, parece haber aceptado las reformas que ya se hicieron, y que es posible sacar provecho de ellas.

Por lo demás, es evidente que la desconfianza hacia la democracia cristiana no ha disminuido fuertemente, por lo que su beligerancia contra ésta se va a mantener por un tiempo.

De manera similar, se percibe un enfrentamiento del aspecto reformista de parte de los Estados Unidos y la democracia cristiana. Hay que recordar que los norteamericanos se encontraron una situación en la que no podían detener las reformas económicas, que tuvieron que aceptarlas y darles un matiz contrainsurgente. Así, éstas fueron profundizadas hasta el límite de lo que la clase dominante podía llegar a aceptar por un lado, y hasta donde apoyaban a la contrainsurgencia por el otro. Las reformas económicas no eran suficientes para reconstruir el sistema de dominación en crisis. Se hacía necesario convencer a la oligarquía del reformismo y crear un nuevo ejército. Para lo primero, era necesario que la clase dominante se presentase a la discusión en una forma orgánica, y lo hizo aceptando las reglas del juego “democrático” y contribuyendo así a la reconstrucción del sistema político. ARENA cumplió eficazmente con ello. Para lo segundo, había que crear uniones especiales que fuesen sustituyendo al viejo cuerpo, y que tuviesen una visión reformista; esto se ha hecho lentamente pues representa un golpe bajo a la oligarquía y había que suavizarlo para no provocar un enfrentamiento interno de carácter armado.

Así, al completar las medidas políticas sobre las cuales se intentará generar la hegemonía reformista, la democracia cristiana y los Estados Unidos parecen haber aceptado:

- a] la imposibilidad de profundizar las reformas económicas, especialmente la agraria;
- b] la necesidad de una estrategia de reactivación plenamente apoyada por la oligarquía; y
- c] la necesidad de una estrategia militar contrainsurgente única.

A partir de estas tendencias, es de esperar que se estén creando condiciones para un eventual acuerdo entre la oligarquía (o su sector en transición) y los Estados Unidos, lo cual por cierto no será fácil entre otras cosas por la presencia de la DC y los odios que durante tanto tiempo han ido germinando, pero que puede ser viable en términos de la aceptación de la clase dominante de las reformas que ya se hicieron, el compromiso norteamericano de no profundizarlas y la garantía de una cuota de poder. Por lo demás la oligarquía sería la beneficiaria principal de la puesta en marcha de los planes de reactivación económica.

EL PERIODO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Este periodo, que se inicia en junio de 1984 y es todavía muy joven, verá la prueba de conduce en esa dirección.

fuego del reformismo. Éste intentará constituir un bloque hegemónico que incluya a una renovada oligarquía y conjurar definitivamente el espectro de la revolución.

Las elecciones

El proceso electoral programado para el 25 de marzo de 1984 y en el cual se eligieron presidente y vicepresidente de la república constituyó un paso más para completar el sistema político que legitima el reformismo salvadoreño. En adelante será puesto a prueba constantemente, pero no cuestionado en sus raíces por la clase dominante.

La fórmula electoral diseñada requería de una mayoría absoluta para que un candidato fuese proclamado ganador. Debido a ello, se previno una segunda ronda de votaciones, que se verificó el 6 de mayo. Los orígenes de este diseño deben buscarse en la estrategia de los Estados Unidos y en la correlación de fuerzas dentro de la Constituyente.

El sistema político que funcionó en el país durante los años sesenta y setenta determinaba que el presidente de la república debía obtener para su elección directa el 51 % de los votos válidos computados; en el caso de que ese porcentaje no fuera alcanzado por ninguno de los candidatos, la elección pasaba a manos de la Asamblea, la que escogería entre los dos candidatos más votados. Fue a través de este mecanismo como Duarte fue derrotado en 1972. Ahora, doce años después, el antiguo diseño no podía ser aceptado: por un lado, se necesitaba garantizar la victoria de un candidato reformista, preferiblemente de la democracia cristiana, en las elecciones de 1982 ésta sólo había obtenido el 40% de los votos: ¿cómo asegurar hoy una mayoría? Por otro lado, la Constituyente estaba dominada por la derecha coaligada; de pasar a sus manos la elección, ésta seguramente se inclinaría en contra de Duarte.

El 25 de marzo, la democracia cristiana obtuvo 549 727 votos, el 43.31% del total, insuficiente para la elección. El 6 de mayo sumó 752 625, el 53.59%, con lo que Duarte se convirtió en presidente electo.¹⁵

El proceso electoral de 1984 marcó claras diferencias con el de 1982. Ahora se aseguraron los mecanismos para garantizar la victoria reformista, las fuerzas democrático-revolucionarias mostraron una actitud distinta y se reflejaron claramente los intereses norteamericanos.

La actitud asumida por el FDR-FMLN ante las elecciones presidenciales parece haber partido de la visualización de los errores cometidos en marzo de 1982, cuando no consiguió el boicot y por el contrario perdió credibilidad. En 1984, la alianza opositora intentó:

- a] quitarle importancia al proceso electoral, argumentando que no expresaría la voluntad del pueblo salvadoreño;
- b] reducir el proceso electoral a una comedia prefabricada por y en beneficio de los intereses norteamericanos;
- c] mostrar su presencia a través de la consigna de “continuar la guerra antes, en y después de las elecciones”; y
- d] oponer la propuesta de creación del GPAP.

La alianza democrático-revolucionaria argumentaba que El Salvador vive en estado de

¹⁵ En 43 localidades pequeñas no se desarrollaron elecciones; constituían el área controlada por los rebeldes.

guerra, que no son posibles elecciones generales en un país cuya quinta parte se encuentra bajo control directo del FMLN y del que han tenido que salir al extranjero más de 800 mil personas; que no hay libertad de expresión y organización debido a los escuadrones de la muerte, a la represión, etcétera; que sólo se podía elegir desde el centro a la extrema derecha; y que eran muy posibles los fraudes por deficiencias en el proceso electoral. En estas condiciones, se demostraba que más que un instrumento para medir la voluntad popular, las elecciones no eran más que una comedia prefabricada para justificar y potenciar el proyecto norteamericano en El Salvador; que en el fondo éstas no tenían otro objetivo que el mantenimiento de la situación de guerra como forma de contención y expectativa de triunfo sobre las fuerzas insurgentes.

Los argumentos expuestos por la alianza democrático-revolucionaria eran sustancialmente correctos y reflejaban la problemática general del proceso electoral en las condiciones específicas del país.

Ciertamente las elecciones, y especialmente su resultado, han sido enormemente beneficiosas para la política norteamericana. En primer lugar, el manejo publicitario del carácter masivo de las votaciones reduce obstáculos a la ayuda económica y militar; en segundo lugar, se posee ahora un gobierno con la legitimidad necesaria para solicitar fuerzas extranjeras en su defensa; en tercer lugar, el resultado aportó un gobierno reformista y dispuesto a abrir canales de participación plural.

Pero también han resultado ventajosas en otros aspectos; en primer lugar, fueron un mecanismo aceptado por la oligarquía, tanto en su diseño como en su resultado; en segundo lugar, han sido el método por el que se ha logrado sustituir al antiguo gobierno de “unidad nacional” que para finales de 1983 se encontraba totalmente desgastado y con el que la DC no estaba totalmente comprometida. Han contribuido así a formar una nueva imagen del gobierno y han sido un paso más en el sometimiento de la clase dominante al sistema político levantado por encima de las reformas.

Finalmente, al haberse llevado a cabo con relativo éxito, el proceso electoral se muestra nacional e internacionalmente como mecanismo seguro de sucesión política, invalidando —al menos temporalmente— las propuestas insurgentes tendientes al GPAP.

El periodo de Duarte

El gobierno de Duarte se enfrenta con la tarea primordial de crear un bloque hegemónico basado en el reformismo tal y como éste se ha dado en la realidad. Para ello tendrá que buscar:

- a] el sometimiento de la clase dominante a la visión norteamericana, no sólo política y militarmente, sino también como gestores principales de una supuesta reactivación económica;
- b] la creación de una base social de apoyo al gobierno reformista y sus iniciativas;
- c] la ruptura del aislamiento internacional en que había caído el gobierno de unidad nacional; y
- d] la derrota militar del FMLN.

El nuevo gobierno parece haber comprendido que estas metas no se pueden conseguir al mismo tiempo; es más, que la principal de ellas —la derrota militar del FMLN— es un

objetivo de largo plazo.¹⁶

Durante los primeros cuatro meses de gobierno, la actividad presidencial muestra ya las prioridades que se ha impuesto, sus alcances y sus limitaciones. Hasta el momento, los puntos más relevantes de la misma parecen haber sido:

- a] la visita realizada por Duarte a Estados Unidos aún antes de asumir el cargo, y que consiguió lo que el gobierno republicano esperaba: disminuir las tensiones en el Congreso en torno a la ayuda económica y militar;
- b] la firma del llamado “pacto social” entre el nuevo gobierno y la UPD;
- c] la gira realizada por Duarte a Europa occidental en busca de apoyo político y financiero;
- d] la visita realizada por Duarte a Venezuela, Colombia y Panamá en el marco de las negociaciones con el grupo Contadora; y
- e] el llamado hecho en las Naciones Unidas para iniciar un diálogo sin precondiciones con la alianza democrático-revolucionaria.

Es muy temprano todavía para hacer una evaluación rigurosa de los resultados en lo que va del periodo, pero de manera muy provisional hay que apuntar los siguientes elementos:

1. En su visita a Europa, Duarte se encontró con las mismas dificultades que la oposición de izquierda, con el hecho de que la mayoría de los gobiernos tienden a una visión regional y a apoyar las gestiones e iniciativas del Grupo Contadora, el cual se ha convertido en el garante necesario ante la comunidad internacional. Para el establecimiento de relaciones más positivas con aquellos países, Duarte deberá agotar primero el recurso de Contadora.

Es en este marco en el que debe entenderse la gira a Venezuela, Colombia y su paso por Panamá. Esto forma parte de la estrategia que las condiciones internacionales le han impuesto, de la necesidad de conquistar Europa vía Contadora. Sin embargo, esta estrategia se halla momentáneamente bloqueada debido a las negativas del gobierno salvadoreño a firmar el Acta de Paz.

2. En el ámbito nacional, el gobierno demócrata cristiano no encuentra el camino para abordar los grandes problemas nacionales: la economía y la guerra.

La esperada reactivación económica no se asoma, quizás porque los inversionistas, si bien pudieran estar interesados en aprovecharse de la ayuda económica extranjera, no encuentran garantías en una situación en la que el FMLN es capaz de sabotear las más grandes fuentes de energía y de tener la circulación terrestre a nivel nacional en cualquier momento.

En el aspecto militar el ejército no consigue avances sustanciales. De hecho, la estrategia impulsada durante los últimos meses parece ser la contrapartida de la visión desarrollista que fracasó en San Vicente y se centra en la búsqueda de la destrucción de toda vida y medio de producción existente en las zonas de control rebelde a través de bombardeos aéreos que han causado ya por lo menos dos masacres de campesinos, de una de las cuales se han proporcionado evidencias fotográficas y ha provocado la reacción negativa de la Iglesia católica, uno de los sostenes de la democracia cristiana.

3. El llamado al diálogo y su inicio efectivo el 15 de octubre ha sido quizás el hecho más importante en este periodo. El proceso de diálogo debe entenderse como un enfrentamiento

¹⁶ Esto no es sustancialmente correcto, pues la derrota militar del FMLN no es una responsabilidad del gobierno, sino un problema que los Estados Unidos deben resolverle.

de importantes dimensiones y la apertura de un nuevo campo de lucha político. En este sentido es necesario dividir el hecho reciente en tres momentos. Un primer momento corresponde al discurso de Duarte en las Naciones Unidas, que toma “fuera de base” a la alianza opositora. De hecho la respuesta inmediata del FDR-FMLN es una negativa que se corrige de un día para otro. En ese momento Duarte parece haber tenido en sus manos la iniciativa.

El segundo momento corresponde a ese corto plazo de preparación de la reunión en La Palma, durante el cual Duarte se muestra indeciso y rechaza la presencia de observadores internacionales e incluso las tropas que debían ocupar el pueblo, mientras el FDR-FMLN, al tiempo que sugiere condiciones, confirma su presencia cualquiera que sea la situación y asume la iniciativa política.

El tercer momento corresponde a la reunión misma, en la que la democracia cristiana montó un verdadero espectáculo propagandístico, pero que mostró claramente que Duarte no tiene nada nuevo que ofrecer (una amnistía ya había sido ofrecida por Magaña hace año y medio), mientras que el FMLN tiene mucho que exigir.

Independientemente de lo anecdótico de la situación, es importante analizar las condiciones reales en que da inicio el diálogo. En primer lugar hay que destacar algo que no puede pasar inadvertido y confirma, al menos parcialmente, la hipótesis fundamental de este trabajo: el hecho de que para hacer tal propuesta el gobierno tuvo que haber conseguido previamente una garantía, si no de apoyo, por lo menos de neutralidad de parte de la derecha y el ejército.

Los hechos que siguieron al discurso en la ONU confirmaron esto. Ningún partido de la derecha se opuso al diálogo.¹⁷ Por el contrario, éste fue apoyado incluso por la empresa privada.

En segundo lugar hay que preguntarse por qué Duarte llama al diálogo ahora, después de las recurrentes negativas a las propuestas insurgentes. Para responder hay que tener en cuenta por lo menos cuatro factores:

- 1] la presión interna e internacional para la búsqueda de una “solución política”;
- 2] el propósito de conquistar el apoyo de la comunidad internacional sin la mediación de Contadora;
- 3] la campaña de reelección de Reagan; y
- 4] el intento por ganar base de apoyo incorporando a los sectores sociales salvadoreños que optan por el diálogo como única salida.

Este último es quizás el factor más importante para los efectos de este trabajo. Duarte sabe perfectamente que el diálogo no va a conducir a la paz, es decir, que los insurgentes no van a deponer las armas; en ese sentido está plenamente consciente del fracaso futuro del mismo, pero espera capitalizar políticamente ese fracaso demostrando a la derecha que el poder burgués no es negociable y a los sectores populares que apoyan el diálogo que él hizo lo posible pero que la paz no llega a causa de la intransigencia de la izquierda radical. Además; no descarta la posibilidad de que el diálogo conduzca a una ruptura dentro de la alianza opositora y al consiguiente aislamiento internacional de los revolucionarios en su interior.¹⁸

17 ARENA lo calificó como una comedia, pero no se opuso a él.

18 Por lo demás, la apertura del diálogo constituye un avance político tanto del régimen como de la oposición,

En el campo democrático-revolucionario la situación sigue siendo delicada. El FMLN, al menos en sus dos principales organizaciones, se convierte rápidamente en un ejército popular muy poderoso, con todas las ventajas e inconvenientes que ello implica. Cuenta con una fuerza considerable, pero no tiene objetivo pequeño, y esa fuerza todavía no es capaz de golpear las concentraciones mayores del enemigo con periodicidad, por lo que estos golpes han estado bastante espaciados en el tiempo y durante estos meses la acción diaria se ha centrado en el sabotaje económico y la suspensión del tránsito, que han tenido éxito. Por lo demás, hay que suponer que el ejército conoce la potencia y capacidad de movilización del FMLN, puede prever los posibles objetivos de ataque y reforzarlos considerablemente. Es pues lógico pensar que el ejército popular se encuentra en una fase de readecuación de sus estructuras para poder cumplir con éxito las tareas que las condiciones actuales de la guerra imponen.

En el aspecto político, la alianza opositora no ha conseguido vender el proyecto del GPAP ni en el exterior ni en el interior del país, quizás por lo inviables que son algunos de sus puntos. Por el contrario, los resultados electorales hacen pensar que la influencia del FDR-MFLN, fuera de sus zonas de control, dista mucho de ser capaz de generar acciones políticas de la población.

Esto último sin embargo podría comenzar a cambiar si la alianza consigue manejar políticamente el diálogo con Duarte ante las masas urbanas.¹⁹

El reformismo y la revolución

La sociedad salvadoreña en octubre de 1984 es algo muy distinto a lo que cinco años antes encontraron los reformistas que participaron en la primera Junta de Gobierno. Acicateado por el espectro de la revolución, el régimen oligárquico ha asumido un nuevo ropaje, se ha maquillado y se ha afilado las uñas. El reformismo se ha instaurado de la única manera posible, sin el pueblo; la oligarquía se acerca a la aceptación de lo que queda de las reformas; y sobre éstas se ha constituido una nueva sociedad política que les da legitimidad.

El nuevo régimen busca ahora su consolidación, esto es, el completo alineamiento de la clase dominante a los planes norteamericanos, la creación de una base social de apoyo, la reactivación de la economía y la derrota militar del FMLN. Para conseguirlo se enfrenta con dos problemas fundamentales: los límites estructurales que él mismo se ha impuesto y la amenaza de la revolución.

Los primeros tienen que ver con el hecho de que las reformas económicas han sido definitivamente insuficientes para resolver, aunque fuese temporalmente, los graves problemas del país y con que el régimen no puede profundizarlas. Tal y como se han puesto en práctica, las reformas no resolverán los problemas de las grandes masas urbanas, de los campesinos pauperizados, ni provocarán la reactivación industrial esperada, sobre todo si se considera que ni la economía se reavivará, ni se podrá atender demandas populares, ni la clase dominante terminará de alinearse al nuevo régimen, si no se conjura definitivamente el peligro de la revolución.

Se presentan así algunas de las contradicciones a las que se enfrenta:

en tanto abre espacios nuevos de lucha que pueden ser capitalizados por uno u otro y genera condiciones para la removilización urbana y el incremento de la politización popular.

19 Para lo cual necesitan prolongar dicho diálogo.

- 1] necesita urgentemente de la paz, pero debe continuar haciendo la guerra;
- 2] necesita de una base social de apoyo pero no puede dar solución a las necesidades populares; y
- 3] necesita de los inversionistas pero no puede ofrecerles las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo.

Puede pensarse que esas contradicciones comenzarán pronto a crear focos de tensión más abiertos y populares, pero no puede deducirse que esto represente una ventaja política para el movimiento democrático-revolucionario.

El reformismo en El Salvador no está en un callejón sin salida. Se ha construido como un castillo de naipes, es cierto, pero si no se le sopla no se vendrá abajo. Si el movimiento popular no es capaz de capitalizar esas contradicciones y derrotarlo políticamente, la fuerza militar con que cuenta sólo servirá para justificar más altos grados de intervención norteamericana. Si la alianza opositora no encuentra los argumentos políticos que oponer no a Duarte, ni al ejército, ni a la oligarquía, sino al reformismo como tal, aquellas contradicciones no destruirán al régimen.

Hoy, cinco años después de que el reformismo, ante las amenazas del movimiento popular, arreciara sus intentos por implantarse en contra de los intereses oligárquicos, va en busca de su consolidación en contra de la revolución. La contradicción secundaria da paso a la contradicción principal. La lucha apenas comienza.

México, 16 de octubre de 1984